

La participación cívica binacional de la sociedad civil migrante mexicana

Xóchitl Bada*

Las primeras organizaciones civiles mexicanas en Estados Unidos que se formaron a principios de siglo XX fueron las asociaciones mutualistas que surgieron para cubrir las necesidades de la población inmigrante en casos de defunción, desempleo y accidentes. Estas organizaciones se interesaron por reproducir la cultura y las costumbres sociales de las colonias mexicanas en los Estados Unidos y solidarizarse con el Estado nación mexicano durante la primera mitad del siglo XX (García, 1996, Gamio, 1930). El elemento unificador para la mayoría de las organizaciones mexicanas era la identidad nacional y la posibilidad de transmitir los valores y la cultura a la segunda generación.

La mayoría de las organizaciones mutualistas que se fundaron a principios del siglo XX no sobrevivieron debido a que su período de maduración coincidió con la era de las deportaciones masivas de mexicanos durante la depresión económica de los años treinta y se volvió muy difícil mantener suficientes miembros para solventar los gastos de la organización. Algunos de los elementos más importantes para mantener la conexión con la madre patria y demostrar a la sociedad estadounidense que no estaban dispuestos a someterse al modelo de asimilación imperante, según las primeras organizaciones de mexicanos de principios de siglo, eran: reafirmar la mexicanidad a través de la celebración del Día de la Independencia, retener el idioma español como principal medio de comunicación, tener un ballet folclórico y no adoptar la ciudadanía estadounidense como requisito para la membresía (Arredondo, 2008).

Si bien es cierto que las organizaciones civiles contemporáneas de migrantes mexicanos en Estados Unidos han conservado el interés por mantener la identidad mexicana mediante manifestaciones culturales y la transmisión de valores morales a la segunda generación, los miembros de las organizaciones que se han establecido a partir de la segunda mitad del siglo XX han empezado a aceptar las identidades nacionales duales y, sobre todo, están interesados en obtener respeto, visibilidad y reconocimiento de la identidad nacional mexicana no sólo dentro de los

* Universidad de Illinois en Chicago, Programa de Estudios Latinoamericanos y Latinos, profesora-investigadora, xbada@uic.edu.



confines geográficos de los Estados Unidos sino también dentro de los espacios políticos, culturales y sociales en sus comunidades de origen. De ahí que las organizaciones de migrantes mexicanos contemporáneas (posteriores a 1965) han utilizado la identidad topofílica del pueblo de origen como el primer espacio para reafirmar su identidad y participar tanto en los asuntos que afectan a sus pueblos, municipios y estados de origen como en la defensoría de derechos de sus paisanos en las ciudades donde residen en los Estados Unidos (Bada, 2010).

Gracias a la amnistía que se logró con la aprobación de la llamada Ley Simpson-Rodino de 1986, muchos migrantes mexicanos pudieron regresar a sus comunidades de origen con más frecuencia y pudieron comparar las enormes disparidades económicas que muchos pueblos rurales estaban enfrentando debido a los procesos de liberalización económica que ocurrieron en México a mediados de la década de los ochenta. En cada viaje para disfrutar de las fiestas patronales o de sus vacaciones, los migrantes observaban que muchas de las comodidades que ellos gozaban en su nueva cotidianidad en urbes estadounidenses (agua entubada, teléfono particular o electricidad), eran lujos que no existían en sus pueblos de origen. Muchos de los líderes pioneros de la formación de comités migrantes aún tenían familiares viviendo en México y querían hacer algo para mejorar su calidad de vida. Es entonces que empezaron a reproducir los comités de obras del pueblo desde Estados Unidos para contribuir con sus faenas y tequios; estos comités organizaron bailes, fiestas, kermeses y rifas para recaudar fondos para diversos proyectos de infraestructura en sus pueblos. Sus primeras prioridades eran ayudar a mejorar la calidad de vida de sus paisanos, luchar contra la corrupción de los gobiernos locales y demandar más servicios e infraestructura a las autoridades. Al mismo tiempo, también aprovecharon para discutir los problemas locales que los aquejaban en sus nuevas comunidades de residencia, como la educación bilingüe y bicultural para sus hijos, el acceso a los servicios de salud, la legalización de los indocumentados y la prevención de la violencia de las pandillas, entre otros.

Este incremento en la participación binacional de los migrantes mexicanos se vio facilitado, en parte, por las revoluciones en las comunicaciones y el transporte. Por ejemplo, las líneas telefónicas particulares llegaron a muchos pueblos rurales mexicanos hacia mediados de la década de los ochenta y, con ello, la información sobre las necesidades colectivas se diseminó hacia Estados Unidos con más rapidez. Éste y otros avances tecnológicos (la reducción de las tarifas aéreas, el fax, el internet, la telefonía celular y las cámaras de video portátiles) facilitaron la planeación de proyectos de infraestructura entre patrocinadores y beneficiarios a pesar de estar físicamente separados por miles de kilómetros de distancia. Además, a fines de los ochenta y principios de los



noventa, México experimentó un proceso de descentralización económica que si bien otorgó más poder a los municipios para tomar sus propias decisiones de crecimiento y desarrollo, también creó nuevas presiones y retos en muchos gobiernos locales que estaban habituados a un sistema federal altamente centralizado.

Como consecuencia del establecimiento de un nuevo federalismo cada vez más descentralizado, los gobiernos municipales tuvieron que tomar nuevas responsabilidades con los recursos recibidos para ofrecer y mejorar los servicios públicos de pequeñas comunidades localizadas en lugares muy apartados de las cabeceras municipales. Sin embargo, los recursos no siempre se distribuían equitativamente en los municipios y muchos pueblos apartados eran frecuentemente excluidos del reparto para infraestructura básica. Por ello, para aquellos presidentes municipales interesados en multiplicar recursos para construir nueva infraestructura básica, llamar a los paisanos que estaban en Estados Unidos para pedirles ayuda se convirtió en una estrategia atractiva. Por ejemplo, a principios de la década de los noventa, el consulado mexicano en Chicago empezó a registrar las visitas que hacían los presidentes municipales a sus paisanos para traerles noticias de su municipio e informarles de los problemas más apremiantes en sus comunidades. Actualmente, muchas organizaciones se forman espontáneamente a partir de clubes de fútbol o grupos religiosos guadalupanos pero otras se establecen gracias al estímulo de presidentes municipales y visitas de autoridades estatales y federales.

En muchos casos, los clubes de oriundos se inician como grupos informales basados en las relaciones con los pueblos de origen en México. Este sistema organizativo es el primer paso hacia la formalización y el establecimiento de estructuras organizativas de segundo nivel: las federaciones, las cuales agrupan a varios clubes de oriundos del mismo estado y forman organizaciones sombrilla con el objetivo de fortalecer su representatividad y legitimidad frente a las autoridades estatales para atraer la atención de los gobiernos estatales y mejorar la atención que brindan los gobiernos a sus migrantes. Como consecuencia del arduo trabajo de planear, desarrollar y finalizar exitosamente proyectos en sus comunidades, los miembros de los clubes fortalecen los lazos de solidaridad y sentido de pertenencia con sus pueblos al ver el reconocimiento que les dan sus autoridades estatales y municipales. De hecho, en algunos casos, las colaboraciones de los clubes para mejorar la calidad de vida de sus pueblos ha sido el inicio de una nueva forma de participación binacional en la que los clubes son consultados por los presidentes municipales en procesos de toma de decisiones sobre desarrollo municipal.



Los clubes y federaciones de oriundos empezaron a proliferar a fines de la década de los ochenta, especialmente en las áreas metropolitanas de Los Ángeles y Chicago. Durante la década pasada, estas organizaciones se han expandido hacia lugares menos urbanos y en la actualidad también se encuentran en algunas zonas rurales; sin embargo, 80 % del total de los clubes de oriundos se encuentran concentrados en los estados de Illinois y California con una fuerte concentración en las áreas metropolitanas de Los Ángeles y Chicago.

En 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía registrados 320 clubes de oriundos de los cuales 233 estaban localizados en California y el resto en los estados de Illinois, Texas, Washington, Nueva York y Arizona (Díaz de Cossío *et al.*, 1997:85). En la actualidad, se estima que existen más de 600 clubes registrados en consulados mexicanos a lo largo y ancho de los Estados Unidos, representando a 28 estados de la república. Este crecimiento se debe, en parte, al aumento de la migración hacia Estados Unidos en la última década del siglo xx, junto con un aumento exponencial de las remesas familiares que los migrantes mandan a sus familias en sus lugares de origen. Por ejemplo, en 2002, el estado de Michoacán recibió 1 692 millones de dólares por concepto de remesas familiares y en 2006, ese estado recibió 2 471 millones de dólares, lo cual refleja un aumento significativo en menos de un lustro (Navarro Chávez y García García, 2007:273).

En la primera década del siglo xxi, México experimentó un aumento anual constante en sus ingresos por concepto de remesas familiares, alcanzando 26 mil millones de dólares en el año fiscal 2007. La recesión de los Estados Unidos produjo una disminución en los ingresos anuales de remesas al país a partir de 2008; sin embargo, el aumento de las remesas familiares por más de una década ha tenido un impacto positivo en el combate a la pobreza y en la estimulación de las actividades locales económicas. Asimismo, las remesas familiares de tipo colectivo también han contribuido en las innovaciones en su aprovechamiento para proyectos de desarrollo comunitario e infraestructura básica. A partir de 2002, gracias al programa 3x1 para migrantes que estableció la Secretaría de Desarrollo Social, los gobiernos municipales, estatales y federal invierten un peso por cada peso que los clubes de oriundos inviertan en proyectos de desarrollo en sus comunidades de origen. Entre los proyectos que financian los clubes destacan los pozos de agua, electrificaciones, pavimentaciones, carreteras, becas escolares, remodelación de escuelas, iglesias, panteones y pequeños proyectos productivos.

El crecimiento vertiginoso de estas organizaciones ha tenido implicaciones importantes. En contraste con la relativa informalidad y aislacionismo político que caracterizó a estas organizaciones hasta mediados de la década de los noventa, las nuevas federaciones y asociaciones



de clubes han consolidado sus estructuras organizativas y han expandido el radio de acción de sus agendas, incluyendo asuntos que afectan su vida cotidiana tanto en los Estados Unidos como en México. Cabe hacer notar que las actividades filantrópicas que estos grupos llevan a cabo por sus comunidades de origen han cambiado significativamente en la última década. Mientras que en el pasado efectuaban proyectos de manera irregular y en forma poco organizada, las inversiones en infraestructura básica han crecido considerablemente en montos de inversión y se han vuelto mucho más sistemáticas. El número de organizaciones continúa creciendo y algunas estimaciones no oficiales consideran que podría haber hasta 1000 clubes en 46 consulados en 31 estados de la Unión Americana.

Este aumento, tanto en el número de organizaciones como en las actividades que éstas realizan y el alcance de sus nuevas agendas y contexto de acción, ha incrementado la visibilidad de las federaciones en la esfera pública binacional y ha ayudado a incrementar el diálogo con todos los niveles del gobierno mexicano y con algunos gobiernos locales y estatales en Estados Unidos. Gradualmente, estas organizaciones se han transformado en una fuerza con mucha representatividad en la sociedad civil migrante latinoamericana en los Estados Unidos. Sin embargo, el incremento del diálogo entre el gobierno mexicano y las organizaciones de migrantes todavía no ha logrado producir cambios coherentes en las políticas públicas que logren crear la infraestructura necesaria para prevenir la migración indocumentada hacia los Estados Unidos. El programa 3x1 sin duda ha ayudado a resolver problemas inmediatos de infraestructura básica pero no existen pruebas definitivas de que este programa haya logrado disminuir los niveles de expulsión de mano de obra. Las presiones económicas, sociales, y culturales que impulsan la migración aún persisten en miles de municipios a lo largo y ancho del país (Rivera-Salgado y Bada, 2010).

Es importante reiterar que la participación extraterritorial de las organizaciones de migrantes agrupadas por pueblo de origen ha tenido una mayor visibilidad entre aquellos mexicanos que residen en grandes ciudades en Estados Unidos (Alarcón, 2002; Orozco, 2002). Las ciudades de Los Ángeles y Chicago son las que concentran la gran mayoría de organizaciones de mexicanos interesadas en participar activamente en sus comunidades de origen. En el caso de México, la participación en el desarrollo de las comunidades de origen ha estado concentrada en comunidades rurales, ya que éstas son las que tienen más necesidades de infraestructura básica, sobre todo aquellas que están alejadas de las cabeceras municipales. De hecho, el mayor porcentaje de proyectos de desarrollo que los migrantes michoacanos, jaliscienses y zacatecanos han



desarrollado en sus comunidades de origen está concentrado en comunidades alejadas de la cabecera municipal (Bada, 2010; Burgess, 2005).

Por ejemplo, los clubes de oriundos del estado de Michoacán se encuentran entre las organizaciones más prominentes en el área metropolitana de Chicago y nos ofrecen un excelente ejemplo del camino que han seguido los clubes en la década pasada. Los primeros clubes de oriundos michoacanos se establecieron en Chicago a fines de la década de 1960 y la primera Federación de Clubes Michoacanos en Illinois (Fedecmi) se estableció formalmente con 14 clubes en 1997. En Michoacán, estas organizaciones han luchado por combatir la corrupción y han demandado más atención del gobierno y recursos para sus comunidades, tanto las que viven en Michoacán como las que residen en la zona metropolitana de Chicago. En la actualidad, los migrantes michoacanos tienen una red de aproximadamente 100 clubes. La mayoría de ellos están localizados en los estados de California, Illinois, Nevada, Washington y Texas.

En 2004, durante las elecciones de medio período, varios candidatos migrantes compitieron por curules en la legislatura estatal, y el Congreso estatal michoacano 2005-2007 incluyó al menos a siete legisladores que obtuvieron su curul después de haber retornado de los Estados Unidos. Además de apoyar las candidaturas migrantes al congreso estatal, el gobierno michoacano ha respondido a las demandas de los migrantes de extender los servicios gubernamentales más allá de las fronteras geográficas en varias áreas, incluyendo servicios de salud, educación básica a distancia y capacitación laboral. Estos servicios se han concentrado mayoritariamente en los estados de Illinois y California, en donde existen grandes concentraciones de michoacanos. El estado de Michoacán es el único estado de la república mexicana que cuenta con una Secretaría del Migrante, la cual incluye un Consejo consultivo con representación de migrantes con voz y voto. Muchos de los programas que ofrece esta Secretaría se localizan en la Casa Michoacán, que es la sede de la Fedecmi.

La Casa Michoacán se encuentra localizada en el barrio de Pilsen, uno de los primeros barrios mexicanos que se formaron en la ciudad de Chicago en la década de los sesenta. Las oficinas de la Fedecmi proporcionan espacio para reuniones de todos los clubes del área y otras organizaciones comunitarias de base que les solicitan el espacio para acontecimientos culturales, educativos y talleres de liderazgo para la comunidad migrante latina. Por ejemplo, en Casa Michoacán se localiza la sede de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, una red de 90 organizaciones de inmigrantes que trabajan para mejorar la calidad de vida de sus comunidades, tanto en los Estados Unidos como en los países de origen. En la primavera de 2006, Casa Michoacán



fungió como uno de los espacios más visibles e importantes para la planeación de las grandes marchas que se llevaron a cabo en la ciudad de Chicago para protestar y derrocar la Ley Sensenbrenner, la cual pretendía criminalizar a los trabajadores indocumentados en los Estados Unidos. El espacio también se utiliza como galería de arte, foro cultural y cuenta con varios salones para clases de computación y de educación a distancia.

Durante la campaña para registrar a los votantes interesados en participar en las elecciones presidenciales de julio de 2006 a través del voto a distancia, los clubes michoacanos participaron activamente en la campaña de registro en una colaboración con la Confederación de Federaciones Mexicanas, una organización que aglutina a más de una decena de federaciones de clubes en el área metropolitana de Chicago. Con el apoyo de la Fundación Solidago con sede en Massachussets, los clubes de oriundos lograron registrar a 1400 votantes en tres días, representando 41% del total de votantes registrados en el área metropolitana de Chicago. En 2007, un año después del primer ejercicio del voto remoto, los michoacanos migrantes obtuvieron el derecho a votar en las elecciones estatales y lograron votar por primera vez en noviembre del mismo año.

En 2016, los estados de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas llevarán a cabo elecciones estatales en las que contemplan el voto desde el extranjero. De hecho, gracias a la presión ejercida por la sociedad civil migrante, en 2014 se modificó el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para permitir que “los ciudadanos que residan en el extranjero pueden ejercer el derecho a voto para gobernadores de las entidades federativas y del jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal” (Legipe, 2014).

Como se ha ilustrado en esta breve síntesis, en el nivel de políticas públicas, la participación cívica de los migrantes mexicanos no sólo se ha basado en el mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades de origen sino también se ha enfocado en lograr cambios en la políticas públicas estatales y nacionales en ambos países a fin de que las leyes nacionales ofrezcan soluciones reales al problema de la exportación de mano de obra barata hacia los Estados Unidos y las condiciones de explotación en que viven muchos migrantes mexicanos indocumentados.

